

Arturo Alvarado (El Colegio de México) y Héctor Tejera (UAM-Iztapalapa).
Ponencia propuesta a SOMEE 2022:

La democracia participativa en las normas y en los hechos. El ejemplo de la Ciudad de México.

La ponencia presenta un análisis del ejercicio efectivo de los mecanismos de democracia participativa en la ciudad, expresados ámbitos territoriales, sectoriales y temáticos, como por ejemplo el ejercicio del presupuesto participativo. Propone una respuesta a la pregunta de si la constitución reciente y su implementación ha permitido consolidar y ampliar los mecanismos de democracia directa o si encuentra límites en su forma así como en las prácticas ciudadanas. El trabajo propone una discusión teórica de la funcionalidad y eficacia de las proposiciones de democracia participativa en la ciudad y los contrasta con las acciones llevadas a cabo por gobernantes y ciudadanos en los últimos años. Los ejemplos y material empírico han sido colectados en diversas fuentes documentales y observaciones etnográficas.

La categoría de democracia participativa tanto en el gobierno de la ciudad como en los procesos urbanos, cobra particular importancia para reflexionar (y explicar) cómo se han construido las reglas urbanas (de interacción entre habitantes y gobernantes) y cómo se ha creado el espacio (social y político) urbano. Algunos expertos afirman que los públicos participantes tienen impacto real en la tarea de gobernar (Ziccardi, 1998), en la representación y la legitimidad de los actos públicos ((Ver Tejera 2015 y 2019; Álvarez; Ziccardi, 1998; Sánchez Mejorada; Ramírez K, Canto, M.). Esto no se limita a propuestas formales- institucionalizadas- y a políticas localizadas, regionales o a jurisdicciones específicas (como, por ejemplo los presupuestos participativos de la capital, de pronóstico claro en sus metas y alcances). La participación ciudadana está ligada a varias teorías de gobernanza participativa que la consideran un método de toma de decisiones, en donde quienes deciden (autoridades electas, delegadas, distintos públicos participantes) están comprometidos con el involucramiento máximo de los electores o “las bases”, en donde todos y cada uno tienen voz en las decisiones que les afectan. Parten del supuesto que la participación colectiva -organizada- es coherente, racional, y por lo tanto produce resultados óptimos. Otros proponen que la participación ciudadana está “acotada”, limitada por problemas de acción colectiva (Alvarado, 2012) o por organización clientelar (Tejera, 2015). Otros autores argumentan que estos mecanismos de participación presentan o han sido frenados por factores como falta de desarrollo económico, desigualdad, o resistencia de las élites (Boix & Miller, s.f; Landau, 2018).

La pregunta central del trabajo es si la constitución abre realmente posibilidades para fortalecer la democracia en diferentes ámbitos de gobierno, en las relaciones ciudadanas y si es así, en qué ámbitos dicho fortalecimiento está impulsando una ciudadanía activa? La nueva constitución ofrece un conjunto de elementos participativos formales como también reconoce que hay otros informales. El problema que surge de este planteamiento, es que no considera que la agregación de preferencias urbanas no siempre tiene resultados coherentes, porque hay incoherencias en la transmisión entre las preferencias de unos individuos y grupos y la colectividad, porque los beneficios no se distribuyen equitativamente (como sería de esperarse), porque puede generarse ciclicidad o porque hay múltiples vetos. El resultado social no siempre es óptimo. Esto hace que obras públicas que podrían producir beneficios sociales no sean ejecutadas

o lo sean de manera parcial o incorrecta, mientras que otras que son benéficas para grupos de interés limitados se llevan a cabo, o que algunas obras que programáticamente parecían correctas, en su implementación terminan por producir resultados no deseados o de calidad sub-óptima.